

El año antes de Gamonal. Movimiento vecinal y social urbano en el 2013¹

Marc Andreu

(Periodista e historiador, codirige la revista *Carrer* de la FAVB y es investigador del Grup de Recerca i Anàlisi del Món Actual de la Universidad de Barcelona)

En un mundo donde, al margen de avanzar hacia una sociedad líquida a lo Zygmunt Bauman, lo que pasa es que todo lo sólido se desvanece en el aire -como ya explicó Marshall Berman, citando a Marx, para aludir a la capacidad del capitalismo de disolver todos los vínculos sociales-, ni tan siquiera el calendario sirve ya como punto de referencia. Así sucede, al menos, a la hora de hacer un balance para un anuario de lo que el 2013 significó en relación al movimiento vecinal, y a los movimientos urbanos en general, en el conjunto del Estado español. Y es que, como en años anteriores, el 2013 vecinal o urbano no transcurrió tranquilamente del 1 de enero al 31 de diciembre. El año cabe enmarcarlo, de facto, entre febrero de 2013 y febrero de 2014. O lo que es lo mismo: entre la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la dación en pago, la suspensión de los desahucios y el aumento del alquiler social –avalada por 1,4 millones de firmas y defendida con vehemencia y eco mediático por la portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), Ada Colau, el 5 de febrero de 2013 ante el Congreso, que luego la desnaturalizó- y el estallido del conflicto social del barrio de Gamonal, en Burgos, a cuenta de la oposición vecinal a las obras de reforma de un bulevar, en enero de 2014, que terminó con el alcalde de la ciudad castellana, del PP, cediendo ante las protestas ciudadanas. A finales del mismo enero de 2014, y como colofón a analizar igualmente en clave de victoria social, hubo también la marcha atrás del Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid en su plan de privatización del sistema sanitario; un plan combatido tenazmente por la denominada marea blanca, a la que no es ajena el movimiento vecinal de la metrópolis capitalina.

Fruto de todo ello, y situados ya en febrero del 2014, proliferaron los debates y los artículos de referencia que ponían a la PAH, a Gamonal o a la marea blanca de Madrid como paradigma de luchas sociales a imitar. Como si el 2013 no hubiera dado

¹ Este artículo forma parte del *Anuario de Movimientos Sociales 2013*, publicado por Fundación Betiko en Enero 2014. Disponible online en: www.fundacionbetiko.org

ya múltiples ejemplos de lo imbricado que el movimiento vecinal y muchos colectivos sociales urbanos están en todas las mareas y plataformas ciudadanas en lucha contra los recortes; el caso más significativo es, seguramente, el de la marea en defensa de la educación pública, de color verde en la mayor parte del Estado y amarilla en Catalunya. Y como si, al mismo tiempo, el 2013 no dejara suficientes ejemplos en múltiples lugares de aquello que los movimientos sociales urbanos saben (o, cuando menos, intuyen) incluso desde antes de que lo teorizara Henry Lefebvre en 1968, lo difundieran en los años 70 Manuel Castells y Jordi Borja y lo reactualizara recientemente este último en Revolución urbana y derechos ciudadanos (Alianza, 2013) o, a nivel internacional, David Harvey en Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución urbana (Akal, 2013). A saber: que la ciudad es el lugar del cambio histórico desde la Revolución francesa y que el sujeto protagonista de cualquier intento de cambio es la ciudadanía organizada como movimiento social que exige el derecho a la ciudad. Un derecho que no surge primordialmente de fascinaciones y modas intelectuales (que también las hay), sino de la realidad de las calles, los barrios y las luchas por ganar, en tiempos convulsos, de crisis o desesperación, demandas concretas de las clases populares, en una acepción que supera el concepto clásico de clase obrera pero que se ajusta bien a la idea gramsciana de hegemonía de las clases subalternas.

Sin duda alguna, la intervención de Ada Colau de febrero del 2013 ante el Congreso -valorada ya en el resumen vecinal del año 2012- supuso un punto de inflexión mediático. Así como la consolidación, tanto en la agenda política como en la conciencia de un buen número de gente, de la problemática de los desahucios como drama humano, injusticia social y oportunidad para reorganizar las resistencias colectivas desde lo urbano, lo concreto y lo cotidiano. Cuando, en marzo del 2013, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal el procedimiento de ejecución hipotecaria vigente en España desde hace décadas, una importante victoria se apuntaron, sin duda alguna, los movimientos sociales urbanos ejemplificados en la PAH. También victoria fue la concesión a la PAH, en septiembre, del premio Ciudadano Europeo 2013, otorgado por el Parlamento Europeo. En otoño, el programa Salvados con el que el periodista Jordi Évole reinició su temporada televisiva en La Sexta, dedicado a la experiencia de autoorganización vecinal del barrio barcelonés de Ciutat Meridiana, conocido popularmente como Villadesahucios por ostentar el récord de lanzamientos hipotecarios, recordó la centralidad que la problemática de la vivienda tuvo todo el año.

Sin embargo, cuando, en vísperas de Navidad, Ciutat Meridiana volvió a ser noticia porque la misma red asociativa vecinal a la que Évole se había aproximado paró el desalojo no ya de una vivienda más, sino del banco de alimentos solidario que el propio barrio se había autogestionado en un local municipal ocupado vía acción directa pero destinado oficialmente a un centro de producción de tecnología digital, quedó patente algo más, no por conocido menos necesario de evidenciar. A saber: que las

desgracias nunca vienen solas y que no pocas veces la problemática de un desahucio va asociada a otras emergencias sociales ante las cuales la gente, ante la insuficiente respuesta de las administraciones públicas y un Estado del Bienestar recortado y en retroceso, cada vez más se organiza de forma solidaria. Y entre estas emergencias figura el hambre. O, para decirlo de una forma menos hiriente, la falta de recursos para adquirir comida que permita mantener una dieta no ya equilibrada, sino básica, a muchas familias de clases populares afectadas por una crisis que, diga lo que diga la propaganda gubernamental y la macroeconomía, sigue endureciéndose al séptimo año de su inicio. Lo sintetizan unas cifras de desempleo que rondan el 25% de promedio en España (y superiores al 50% entre los jóvenes), con un total aproximado de 6 millones de parados; y muchos de ellos, con las prestaciones o subsidios de desempleo agotados.

Si bien la lucha de la PAH y su lema “Sí, se puede” adquirieron centralidad y visos de victoria gracias también al trabajo colectivo y en red de asociaciones de vecinos, sindicatos, asambleas sociales de barrio herederas del 15-M y plataformas o mareas reivindicativas de todo tipo, se dio una gran paradoja. La siguiente: a lo largo del mismo año en que la PAH pareció alcanzar el zénit de su capacidad de movilización y presión social, incluso con medidas polémicas como los escraches a políticos – estrategia que la Audiencia de Madrid declaró legal y democrática, al menos en el caso del escrache a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría-, los desahucios siguieron creciendo a un ritmo alarmante. Así lo atestiguan las cifras parciales conocidas en enero del 2014, según las cuales tan sólo en el primer semestre del 2013 se dieron tantos lanzamientos de pisos como los 30.034 calculados para todo el año 2012. En concreto, de enero a junio del 2013, y según cifras que por primera vez facilitó el Banco de España, 35.098 familias se quedaron sin casa al no poder pagar la hipoteca.

Así las cosas, ¿el esfuerzo de la PAH y la fuerza de su emblemática lucha cayeron en saco rato? ¿Cómo explicarlo si, pese a que la ILP de la PAH fue tumbada en el Congreso, parecía que las daciones en pago (11.348 en el primer semestre del 2013 por 11.441 en todo el 2012), las ocupaciones de sucursales bancarias, las concentraciones humanas anti-desahucios y las decenas de expropiaciones sociales de bloques de viviendas vacías (sobre un total de 3,4 millones pisos sin ocupar calculados en toda España) fueron más intensas que nunca y, en el 2013, pusieron a bancos y administraciones públicas entre la espada y la pared? De hecho, hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo intervino, el 15 de octubre, para parar temporalmente el desalojo de un bloque de pisos de la SAAREB (el ente público conocido como banco malo) ocupado por la PAH en la localidad de Salt (Girona). ¿Qué es lo que pasó, entonces? Ada Colau admitió que “el aumento de desahucios es significativo ya que coincide con el momento de mayor alarma social, las protestas en la calle, los suicidios y los escraches” y denunció que la banca quedaba “desenmascarada” por su propia estadística cuando un año antes la patronal financiera alegaba que la

mayoría de desahucios eran de segundas residencias o de especuladores. “Ahora reconocen que afectaron a gente trabajadora que había invertido toda la vida en pagar su casa”, criticó la portavoz de la PAH.

La realidad de fondo puesta en evidencia a lo largo de un 2013 especialmente intenso en luchas sociales urbanas, y jaleado de algunas victorias parciales que no hay que menospreciar, la resumía bien Jordi Borja en una entrevista en la revista de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB): “Se trata de movimientos instrumentales, como las mareas ciudadanas o la PAH, pero sin un objetivo político definido. Son transformadores en tanto que construyen cultura política alternativa. Pero fundamentalmente son movimientos de resistencia que no pueden poner en cuestión la estructura del Estado y las características de un régimen político surgido de la transición que no es democrático en origen” (Carrer, nº 130, Barcelona, diciembre 2013). Pocas semanas antes de que Gamonal sorprendiera a no pocos analistas y activistas, que quisieron entrever en la protesta vecinal burgalesa la cerilla que quizá prendiera la mecha de la Santabárbara social acumulada desde hace años en España, la reflexión de Jordi Borja iba algo más allá. Incluso en la especificidad del contexto sociopolítico soberanista de Catalunya como telón de fondo, que Borja ve como una “situación prerevolucionaria” que no necesariamente tiene que estallar pero que, a su vez, es susceptible de provocar también cambios en el conjunto del Estado.

Si el desencadenante de algo es Gamonal y sus posibles émulos o la protesta contra la subida de las tarifas del transporte público que, de diciembre de 2013 a febrero de 2014, fue in crescendo (bastante más que en años anteriores) en Barcelona y su área metropolitana habrá que verlo. Precedentes históricos recientes en el mismo 2013 no faltan. Sean estos la tala de árboles y el proyecto de reforma urbana del parque Gezi de Estambul –que a finales de mayo y en junio del 2013 convirtió una simple protesta vecinal y ecologista en una revuelta política en toda regla duramente reprimida por el Gobierno de Erdogan- o el aumento del transporte público en Brasil –que, protestado ya en el 2012, derivó en junio del 2013 en grandes manifestaciones ciudadanas que pusieron al Gobierno del Partido de los Trabajadores de Dilma Roussef contra las cuerdas, a un año del Mundial de fútbol y a dos de los Juegos Olímpicos. Es lo que, en Brasil como en Turquía, el arquitecto Luis Fernández-Galiano analizó bajo el título de “La rebelión de las clases medias” (El País, 6/7/2013). Con todo, cabe recordar que en Barcelona es un reconocido referente histórico de lucha social urbana capaz de activar grandes cambios la denominada huelga de tranvías de 1951 (con réplica en 1957). Ya entonces, y en pleno franquismo, la oposición ciudadana a una subida de tarifas no sólo tuvo éxito y forzó la retirada del aumento, además de derivar en huelga general y forzar la destitución del alcalde, sino que, además, esa protesta ha sido conceptualizada por el hispanista Sebastian Balfour como ejemplo de inflexión en la historia del movimiento obrero por renovar una forma de disidencia tradicional en Barcelona y contener las semillas de una nueva acción de masas, avanzadilla de los nuevos movimientos

sociales. En esencia: por lo que la huelga de tranvías de Barcelona de 1951 supuso de alianza popular o ciudadana interclasista -tácita si se quiere, pero insólita hasta entonces- entre obreros, vecinos y estudiantes, católicos y comunistas, falangistas disidentes, anarquistas de vieja escuela y catalanistas de extracción burguesa.

Esta cuestión, la de las alianzas sociales, así como los reiterados intentos por entrelazar las distintas luchas o mareas ciudadanas con el horizonte puesto en tratar de esbozar una alternativa política que supere el resistencialismo de los movimientos sociales fue, en realidad, a lo que dedicó sus mayores esfuerzos el movimiento vecinal organizado a lo largo del 2013. No es que el objetivo no viniera de antes ni, inalcanzable todavía, no siga planteado después. Pero son varios los elementos que llevan a resaltar el papel clave del movimiento vecinal -cuya vitalidad, como siempre, va por barrios- como nódulo o punto de encuentro, ni que sea a escala local, territorial, de las distintas luchas, movimientos y sensibilidades sociales, sindicales y políticas. Al margen de manifestaciones más o menos importantes (y de la singular y multitudinaria Via Catalana del 11 de septiembre de 2013), no hubo en el 2013 ni huelga general ni nada parecido al 15-M que aglutinara o catalizara unas luchas o movimientos que, también es cierto, ya habían surgido o sido lanzados de antemano. Esto, la falta de un gran paraguas movilizador general -pero incluso cuando lo hubo, como en el caso del movimiento soberanista en Catalunya-, es lo que dio mayor relieve a la tarea de coordinación y articulación local, en buena parte asumida por las distintas realidades del movimiento vecinal. Y cabe incluir aquí al tejido asociativo reforzado de las asociaciones de madres y padres de alumnos (ampas) en lucha contra los recortes y la regresión en el derecho a la educación (hombro con hombro con los trabajadores de la enseñanza); como cabe incluir la reorganización del movimiento de jubilados y pensionistas, especialmente en lo que concierne a las luchas por la sanidad pública y, singularmente, en las protestas y encierros en ambulatorios o centros de salud de ámbito local (también hombro con hombro con los trabajadores del sector). Las camisetas verdes o amarillas de la marea educativa, las batas blancas de la marea sanitaria y los chalecos fluorescentes de los activistas yayoflautas son tan solo la parte más visible de estas realidades. Pero conviene no olvidar que tienen raíces en las reivindicaciones que las vocalías de educación, de sanidad y de jubilados de las asociaciones de vecinos abanderaron en los años 70 del siglo XX. De la misma forma que el movimiento feminista puesto en pie de guerra al final de este año por la regresiva propuesta de reforma de la ley del aborto enlaza también con las vocalías de mujeres del movimiento vecinal de los 70. No se trata de ningún revival (aunque a veces lo parezca), pero sí de reconocer la existencia de este sustrato.

Un sustrato social, en buena medida vecinal, que puede ser útil. Veamos cómo y por qué. Mientras, en mayo, arreciaban de nuevo en la prensa los análisis y los interrogantes sobre dónde estaba o qué quedaba del 15-M a los dos años del estallido de esa importante revuelta social; y mientras, también, los sindicatos trataban de zafarse de

sus querellas internas y de las zancadillas externas que siguieron propiciando el desbordamiento de la que es (aun esclerotizada) la última gran trinchera organizada de la izquierda hasta que no surja otra cosa; mientras todo esto ocurría, era en los barrios donde germinaban algunas de las semillas sembradas en el 2011 o rebrotaban esquejes de tiempos pretéritos. Y surgió, especialmente, allí donde el terreno estaba ya abonado – u oxigenado por el barbecho- del trabajo previo de movimientos sociales urbanos organizados, fueran estos algunas viejas asociaciones de vecinos, los más jóvenes centros sociales okupados o, incluso, distintas formas de cooperativismo urbano en expansión. Tras impulsar, en febrero y abril de 2013, manifestaciones más o menos multitudinarias con el derecho a la vivienda y la PAH u otras reivindicaciones de las distintas mareas ciudadanas como bandera, los movimientos sociales entraron en una fase de reflexión que, por ejemplo en el caso de Barcelona, fue alentada abiertamente por la FAVB y la Confavc con vistas a aunar esfuerzos y a tejer complicidades entre organizaciones sindicales, plataformas y espacios sociales y políticos distintos y, a veces, incluso enfrentados por viejas querellas en el plural mundo de la izquierda.

Todavía sin resultados concretos aparentes, lo cierto es que a pequeña escala local, de barrio, son numerosos los ejemplos de activación y articulación de espacios sociopolíticos comunitarios en los que coinciden trabajando, codo a codo, activistas de distintas trayectorias y generaciones y de todo el pelaje ideológico posible en el ámbito de la izquierda. Desde la experiencia del Ateneu Popular La Flor de Maig en Barcelona a la red de una treintena de huertos comunitarios impulsados por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), todo contribuye hacia el objetivo que define así el sociólogo Marco Marchioni: “El territorio, los barrios, los distritos y los pueblos tienen que volver a ser el cimiento de nuevos procesos participativos, basados en el respeto a la diversidad y al pluralismo, que sepan superar la fragmentación de las instancias y de los intereses particulares y sepan construir objetivos y finalidades comunes y generales” (La Calle, nº 99-100, Zaragoza, junio-julio 2013). En cierto modo, y tal y como tituló la periodista Núria Marrón en un suplemento dominical de El Periódico de Catalunya (26/5/2013), se ha forjado una “marea vecinal” en la que, “a pie de acera, gentes de las antiguas asociaciones, indignados y afectados por los recortes luchan por los derechos sociales, cooperan e impulsan proyectos nuevos”.

Tímidamente pero de forma significativa, esta marea vecinal que funciona como laboratorio o incubadora de la interrelación entre activistas y movimientos sociales y espacios diversos ha contribuido o dado ya algunos pasos en dirección a experiencias superiores de articulación política, en el sentido amplio de la palabra. De futuro muy incierto, es verdad, pero ni la Asamblea Ciudadana constituida en marzo del 2013 en Sevilla ni el surgimiento de Podemos y sus círculos en Madrid a inicios del 2014 son ajenos a estas experiencias de empoderamiento ciudadano y reconocimiento mutuo entre activistas sociales y políticos que se dan en el ámbito local. Tampoco lo son, por

descontado, la mirada de experiencias surgidas en Catalunya: desde la iniciativa del Parlamento Ciudadano impulsado por la arquitecta y exconcejala de Barcelona Itziar González a los tres foros de confluencia entre movimientos sociales e izquierda política que son el Procés Constituent de Arcadi Oliveres y Teresa Forcadell -espejo en el que se mira Podemos y que logró rodear la sede de la Caixa, el 11 de septiembre, como eslabón con contenido social de la multitudinaria Via Catalana soberanista-, la Trobada per la Unitat Popular que organizó la CUP en Badalona, el 30 de noviembre de 2013, y la multitudinaria Assemblea Oberta impulsada por ICV y EUIA en Barcelona, el 1 de febrero de 2014. El presidente de la FAVB, Lluís Rabell, que intervino en esta última al lado de los líderes de CCOO y UGT, expuso lo que la federación vecinal barcelonesa y la confederación catalana ya argumentaron en junio del 2013 al ser ellas, precisamente, quienes emplazaron a una primera confluencia entre movimientos y luchas sociales con amplios objetivos políticos (que no es lo mismo que partidistas).

“Desde la CONFAVC y la FAVB, después de hablar con las entidades de la Plataforma Prou Retallades y con otras fuerzas y activistas sociales, hemos pensado que sería el momento de volvernos a reunir para evaluar las cosas, proponer alternativas a la ciudadanía, decidir nuevas movilizaciones que empiecen a revertir la actual correlación de fuerzas y nos permitan aspirar otro horizonte. A la vez lejana y familiar, la “primavera turca” nos recuerda una vez más que la historia la hacen los pueblos. A nosotros nos corresponde hacer lo necesario para que el nuestro haga sentir su voz”, rezaba en junio del 2013 un comunicado conjunto de las principales organizaciones vecinales catalanas. Es, pues, con este espíritu, y desde la experiencia de las distintas mareas y del éxito reconocido de la PAH, que el año vecinal culminó con signos de esperanza en la gran victoria de Gamonal, ejemplo y espejo fácilmente reconocible. Por su repercusión mediática y porque la lucha de los vecinos de este barrio obrero de Burgos, golpeado por la crisis como tantos otros, trascendió las fronteras municipales. Aunque lo señalara para sí la Asociación de Vecinos de Gamonal y la federación burgalesa, la ciudadanía que sufre “la violencia cotidiana del paro, los desahucios, la pobreza y los recortes” no está solo en Burgos. Y la capacidad de indignación de un barrio al que se le niega el dinero público para mantener abierta una guardería o para garantizar un buen sistema de transporte público mientras el Ayuntamiento, sin un proceso participativo efectivo, promueve la construcción de un bulevar como política de fachada y a beneficio de un promotor inmobiliario famoso por su historial corrupto y sus vínculos con el poder local es la misma, la indignación, en Gamonal que en infinidad de otros sitios. En España como en Turquía.

Menos conocido que el caso de Gamonal, y sin el dramatismo de los incidentes y las cargas policiales que pusieron a Burgos y a Estambul en todas las pantallas de televisión, casi por las mismas fechas el alcalde de Barcelona hizo como el de Burgos y se echó atrás en el plan de reforma de la Rambla del Poblenou, cuyas obras también habían paralizado los vecinos del barrio. Ello galvanizó el denominado proceso Fem

Rambla, dinamizado por la Asociación de Vecinos de Poblenou pero abierto a otras entidades, a comerciantes y a mucha gente a título individual -el Ayuntamiento se negó a implicarse y trató, sin éxito, de montar un proceso institucional paralelo-, que se convirtió en una experiencia participativa autogestionada con vistas a decidir un plan de usos que orientara la urbanización del paseo central del barrio de acuerdo con los deseos y necesidades de sus vecinos. Elogiado en la ciudad, en el movimiento asociativo e, incluso, con la boca pequeña, en el mismo Ayuntamiento, al final del proceso Fem Rambla se impuso la inteligencia y el alcalde fue capaz de encajar la reivindicación y la victoria vecinal aun a costa de dejar en mal lugar a su concejal de distrito.

Más allá de casos concretos –sean el de Gamonal, el de Poblenou o el eternamente abierto del Cabanyal, en Valencia-, lo cierto es que en el 2013 se extendió la sensación de que si por algún lado podía explotar la crisis global, era en el ámbito local. “Si no hay un giro social decidido en las políticas públicas, si el diálogo y la democracia no sustituyen las imposiciones de una minoría privilegiada que se ha demostrado capaz de secuestrar a las instituciones... habrá dos, tres, muchos Gamonal”, advirtió la FAVB en un comunicado. Y como “en Barcelona nada es casualidad” y muchas veces sirve también de modelo (en el buen y en el mal sentido del término), he aquí lo que el sociólogo y activista cooperativista Iván Miró concluyó en un texto publicado en las revistas Directa y Diagonal (7/2/2014), una reflexión válida para el conjunto del movimiento urbano: “Urge un cambio de régimen político y económico metropolitano. La actual arquitectura institucional de la ciudad tiene que ser desguazada. Por opaca, porque está copada por la partitocracia, por articular de forma estructural la connivencia con el capital privado. Tenemos que poner fin al Modelo, a la concertación público-privada que pone el municipio al servicio de la depredación de la vida urbana. Hace falta una nueva gobernanza metropolitana, basada en formas de democracia radical que garanticen que las decisiones políticas están en manos de la mayoría social. En esta necesaria revolución urbana, los barrios tienen que ser un instrumento político no sólo de una cierta descentralización administrativa sino, sobre todo, de autogestión popular”.